



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: ANA CRISTINA RESTREPO ÁLVAREZ  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 011 2021 00349 01  
Sentencia: S-142

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta en lo no recurrido por esta entidad, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 21 de octubre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

ANA CRISTINA RESTREPO ÁLVAREZ demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia dejando sin

efecto jurídico la afiliación al Régimen de Ahorro Individual que realizó a través de PROTECCIÓN S.A., por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos como cotizaciones, rendimientos, comisión de administración y reaseguros. Pretende además que se condene en costas a las demandadas.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que estuvo afiliada en pensiones al ISS hoy COLPENSIONES, desde el mes de abril de 1989 hasta el mismo mes de 1997, cotizando allí 414.43 semanas; que posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A., convencida que era su mejor opción pensional, debido a que así se lo indicó el "asesor" que la visitó en su trabajo; que en ningún momento recibió una asesoría técnica, mínima y suficiente sobre las características del RAIS y las condiciones para alcanzar una pensión de vejez en ese régimen; que nació el 6 de julio de 1966; que suscribió un documento denominado "Reasesoría", antes de cumplir los 47 años de edad en el año 2013, en el que tampoco recibió una información detallada de su situación particular; que para julio de 2021 le solicitó a PROTECCIÓN S.A. se le informara de su situación, entregándosele dos proyecciones pensionales; que en una de la proyecciones se le indicó que si estuviera en COLPENSIONES tendría un IBL a los 57 años de edad de \$5'968.638, pero que en este momento solo tendría derecho a la Indemnización sustitutiva; y que intentó regresar al RPM, pero se le negó su regreso por cuanto se encontraba a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse, restricción que no conocía.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES, acepta la afiliación a este fondo; que es parcialmente cierto el traslado al fondo privado de PROTECCIÓN S.A.,

pero no le consta la asesoría brindada por éste; que no le consta la reasesoría brindada por PROTECCIÓN S.A.; que no le consta los hechos que van dirigidos en contra del fondo privado; y que es cierto que elevó solicitud de traslado a COLPENSIONES la cual no fue aceptada en cumplimiento a la restricción de la edad. Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que la demandante se trasladó de forma libre y voluntaria en cumplimiento de todos los requisitos legales. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de traslado de régimen, prescripción, prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico, buena fe, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, proporcionalidad y ponderación, indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional, sostenibilidad del sistema financiero de pensiones e improcedencia de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. frente a los hechos indicó que no le consta la afiliación al ISS, y sobre los demás hechos indica que no son ciertos, aclarando que la actora suscribió formulario de afiliación con la entidad luego de que se le brindó y suministrado información adecuada, suficiente, clara, comprensible, detallada, precisa, cierta y comprensible para el traslado; que a la demandante si se le dio explicación de las ventajas y desventajas de su traslado; y que la demandante solicitó a Colpensiones, el 15 de mayo de 2013 traslado al régimen de prima media con prestación definida ante COLPENSIONES, pero que el 16 de mayo de 2013 se retractó de la misma. Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que la afiliación al RAIS fue un acto existente, válido, exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 21 de octubre de 2022, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la vinculación al RAIS de la demandante al RAIS administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A., a la que le ordenó trasladar al RPMPD administrado por COLPENSIONES, todos los aportes del demandante como cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, en razón a la declaración de la ineficacia del traslado, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, también ordenó trasladar la prima de reaseguro de Fogafín y los aportes al fondo de solidaridad pensional, con la respectiva indexación; y **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES.

## RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado de COLPENSIONES presentó recurso de apelación indicando que difiere en lo que respecta a la obligación de COLPENSIONES de recibir a los afiliados que judicialmente deben trasladarse al RPM, ya que no se tiene en consideración las implicaciones económicas y administrativas que representan, como tampoco el tener que asumir una defensa técnica en una relación jurídica sustancial en la que en principio no hizo parte; que el traslado de régimen fue un derecho que ejerció la demandante y el cual es un hecho ajeno a COLPENSIONES; que la demandante reclama la ineficacia por el monto de la mesada pensional, y cabe recordar que el RAIS fue declarado inexecutable; que la carga de brindar una información correcta está en cabeza de los fondo privados y no de esta entidad, por lo que no puede salir perjudicada, afectando la sostenibilidad financiera del sistema; y que deben ser revocadas las costas impuestas a su cargo, toda vez que dentro del proceso

COLPENSIONES es llamado con el fin de recibir como afiliado a la demandante y en el futuro reconocer la pensión de vejez.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, en lo no recurrido.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término legalmente concedido, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión, haciendo alusión a los mismos argumentos señalados en la apelación, indicando que, en caso de confirmar la sentencia, se ordene devolver todos los conceptos, tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido por esa misma entidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se tiene que: **i)** ANA CRISTINA RESTREPO ÁLVAREZ nació el 6 de julio de 1966; **ii)** estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, realizando aportes allí desde el mes de enero de 1988 como consta con la historia tipo CAN<sup>1</sup>; y **iii)** que el 11 de febrero de 1997<sup>2</sup> se vinculó a PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliada actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare

---

<sup>1</sup> Folio 365 de la contestación de Colpensiones

<sup>2</sup> Folio 80 de la contestación de Protección S.A.

ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>3</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en*

---

<sup>3</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

*cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

*"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como*

*emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas.



Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se trasladó a PROTECCIÓN S.A. en el año de 1997, cuando laboraba al servicio de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A, en donde llegó un asesor del fondo privado, el cual le manifestó que el Seguro Social iba a desaparecer y que lo mejor era pasarse a este fondo donde habían mejores garantías y mejores rendimientos en la pensión; que en dicho momento no conocía mucho del tema y le dijeron que tendrían la posibilidad de pensionarse cuando quisieran; y que no recuerda que haya realizado preguntas de las características para obtener la pensión.

De lo anterior no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden

llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual, junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Por otro lado, no es aceptado el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis

*en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.*

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a trasladar**

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos***

**retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Debe señalarse que, en este aspecto, nuestra Alta Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que "... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA**, en tal sentido.

**Condena en costas.**

Finalmente, en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación de la demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante; por lo que se deberá **REVOCAR** la sentencia en este sentido.

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA y REVOCADA**.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el día 21 de octubre de 2022, pero la **REVOCA** exclusivamente en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES, para en su lugar **ABSOLVERLA** por este concepto.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 0ac5720bff2a1b963e59f19275769c2eaaa74d25c8d68600cd84a23c1ebd51ba

Documento generado en 26/05/2023 01:22:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>